

tos constitucionales para la expropiacion. Considerando en cuanto al reglamento del Gobierno del Estado: 1º Que en él se fija la extension del terreno que deba ocuparse, en medio sitio de ganado mayor; destinándose de esta superficie un millon de metros cuadrados para la formacion de la Villa, calles, manzanas, plazas, edificios públicos y demas necesario para asiento del nuevo pueblo, y el resto para fraccionarlo en lotes, que deberán enajenarse á los particulares que lo soliciten. 2º Que al consignarse el producto de la enajenacion de terrenos para fondos de la indemnizacion, si el Ayuntamiento no tuviera los bastantes, no se altera la disposicion de la Legislatura, para que la indemnizacion sea previa, ni puede entenderse derogada la terminante disposicion del expresado decreto, para que sin ser indemnizado previamente el propietario, se tenga por no expedido el mismo decreto. 3º Que seria ilusoria la creacion de un pueblo, si no se le proveyesse de suelo propio para su asiento y fundo legal, de consiguiente hay pública utilidad en la expropiacion por este motivo. 4º Que no estando expedida la ley orgánica del artículo 27 de la Constitucion, seria aventurado, en un fallo judicial, sancionar como principio de utilidad pública, para fundar la expropiacion, el fraccionamiento de una propiedad particular. Por tales fundamentos, se reforma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Tamaulipas en 7 de Enero del corriente año, en que concede el amparo contra el decreto de la Legislatura de 30 de Junio de 1869, y reglamento del Gobierno del Estado, y se declara: 1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al representante de la testamentaria de Escontria, contra el decreto de la Legislatura de Tamaulipas, que ordena la creacion de una Villa en el punto llamado Tantoyuquita. 2º La Justicia de la Union no ampara ni protege al peticionario, contra el reglamento de 17 de Setiembre de 1869, del Gobierno del Estado, en la parte que ordena la expropiacion de un millon de me-

tros cuadrados, para asiento y fundo legal del mismo pueblo. 3º Que la Justicia de la Union ampara y protege al quejoso contra el reglamento referido, en la parte que ordena la expropiacion de ocho millones, seiscientos setenta y ocho mil metros cuadrados, para su fraccionamiento y enajenacion á los particulares que lo soliciten.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito de Tamaulipas, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Tocon.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo y tercero, lo decretaron los ciudadanos Presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Tierdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril cuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

PAPEL SELLADO.

Juicio promovido, ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, sobre la denuncia hecha por el Administrador de Papel Sellado, relativa á la infraccion cometida por D. Angel Bárcena de la fraccion 9ª del artículo 19 de la ley de 14 de Febrero de 1856.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

La averiguacion que antecede, se ha instruido contra el español D. Angel Bárcena

na á consecuencia de la comunicacion de fojas 1, en que la Administracion Principal de la renta del Papel sellado, denunció la infraccion de la fraccion 9ª del artículo 19 de la ley de 14 de Febrero de 1856, cometida por Bárcena, usando de libros no requisitados en la forma que ella previene. En esta virtud, el que suscribe pidió, á fojas 2 frente y vuelta, se hiciera efectiva desde luego la manifestacion de los libros denunciados, y mandado así por auto de 4 del corriente, Bárcena exhibió el libro de su giro habilitado en los bienios pasado y presente; pero el C. Administrador Principal de la Renta, el visitador nombrado para los efectos del artículo 60 de la ley, y los empleados de la oficina del Papel sellado, negaron que el libro sellado exhibido por Bárcena, fuera alguno de los denunciados en la comunicacion que motivó estas diligencias. Por esta razon se extrajeron por el ejecutor, los dos en forma de borradores que expresa la diligencia de fojas 7 vuelta, desiguales en tamaño, y conteniendo el uno ciento cuarenta y dos y el otro ciento cuarenta y seis fojas, que segun los referidos testigos, divergentes en esta parte con D. Antonio Otero, dependiente de Bárcena, no son los que se presentaron al visitador y llevaron á requisitar á la Administracion del Papel sellado, pues que estos eran de igual tamaño, uno tenia ciento cuarenta y tres fojas, y estaba habilitado en bienio pasado, y por último en uno de ellos comenzó á ponerse el encabezado de la nueva habilitacion; de cuyas circunstancias, ninguna aparece en los libros extraídos por el ejecutor en virtud del mandamiento de 6 de Marzo; sin que D. Antonio Otero, cargado con los testigos, explicara satisfactoriamente la razon de estas tan notables diferencias.

Esto expuesto, y encontrándose plenamente justificado por la averiguacion el fraude de que se ha acusado á D. Angel Bárcena, cometido contra la Renta del Papel sellado, por el uso de libros no habilitados en número de doscientas ochenta y

nueve fojas, cuyo caso está comprendido en el artículo 48 de la ley de 14 de Febrero de 1856, así como el de los dos libros extraídos de la misma casa con un número de doscientas ochenta y ocho fojas de que se ha hecho uso en fraude de la renta, el Promotor fiscal pide al Juzgado, se sirva declarar conforme á lo dispuesto en la citada ley; mandando compulzar testimonio de las constancias conducentes de la averiguacion para proceder en contra del testigo D. Antonio Otero, por la falsedad con que aparece se condujo ante el Juzgado, al deponer sobre los hechos materia de estas diligencias.

Así lo entiende de justicia; pero no obstante el Juzgado con su acreditada justificacion resolverá lo que estime conveniente.

Zacatecas, veinticinco de Marzo de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Jesus M. Licona.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Marzo treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Sentencia del Juez de Distrito.

Zacatecas, Marzo treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la informacion practicada para averiguar el fraude denunciado por la Administracion de la Renta del Papel sellado en su comunicacion de tres del presente, relativa á manifestar que D. Angel Bárcena, de este comercio, usó dos libros sin autorizacion previa el uno y el otro con la autorizacion del bienio pasado:

Visto lo alegado por el expresado Bárcena y lo pedido por el C. Promotor fiscal; Considerando: que si bien aparece la denuncia comprobada con las declaraciones de los empleados de la Administracion del Papel sellado, esta prueba resulta en contra de la realidad de los hechos, por la presentacion del libro de cuentas hecha por D. Angel Bárcena, cuyo libro tiene los requisitos legales y los asientos corresponden al bienio

corriente: atendiendo á que no hay obligacion de abrir y autorizar un número determinado de libros para que cada comerciante lleve sus cuentas, y por último; á que no está prohibido usar el número de borradores y auxiliares que se quieran, sin que exista la obligacion de sellarlos, de conformidad con lo dispuesto en la ley 9ª título 22, parte 2ª y artículo 60 de la de 14 de Febrero de 1856, el Juzgado declara que no hay lugar á imponer pena alguna á D. Angel Bárcena, y que se archive el expediente, publicándose el presente auto como previene la ley, sacándose las copias respectivas para el "Semanario Judicial" y devolviéndose al interesado los libros que tiene presentados.

El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé—(Firmado.)—*M. G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Marzo treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis G. Chavez*, secretario.

CRIMINAL.

Causa seguida ante el Juez 1º de Distrito de esta capital, contra Julian Olivares, por portacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez.

El Promotor dice: que la presente causa fué instruida contra Julian Olivares, acusado de ser portador de moneda falsa. El hecho que dió origen al proceso es el siguiente: habiéndose encontrado á Olivares el 30 de Junio último, tirado en la calle en completo estado de embriaguez, fué recogido por la policía, y al levantarlo para conducirlo á la cárcel, cayó una car-

tera que contenia diez pesos un real de moneda falsa. Que así pasó ese hecho, lo han declarado el ciudadano Miguel Hernandez, subinspector que hizo la consignacion del reo, y los guardas números 209 y 29, que lo condujeron á la cárcel y aprehendieron. Que las monedas son falsas, lo han declarado los ciudadanos Rivera y Hermosa, que como peritos fueron llamados por el Juzgado para hacer su calificacion. Olivares en su preparatoria y en la confesion con cargos, niega ser el dueño y portador de las monedas falsas, confiesa que estaba ebrio, y en tal grado, que ignora dónde cayó y lo que pasó cuando lo recogieron: cuenta que venia de Guanajuato á proveerse de efectos de mercería, y que al día siguiente, cuando volvió en su acuerdo, notó le faltaban siete pesos fuertes, valor de las ventas que habia hecho en el camino y le iban á servir para lo que comprara en esta ciudad. Tratándose de un hombre que al ser aprehendido estaba en completa ebriedad, vista su negativa y el incidente de haberlo reclamado al ciudadano subinspector, una muger que se dijo su comadre, y que no se ha podido aprehender no obstante las diligencias practicadas por el Juzgado, pudiera suceder que esa muger ó alguna otra persona, aprovechando el estado de embriaguez de Olivares, le hubiera cambiado las monedas buenas por las falsas, y robado la cantidad que dice le faltaba; quizá sea realmente portador de las monedas falsas, pero esto no está aclarado con la precision que es necesario para que un juez tuta contienda pueda imponer una pena. Por lo expuesto, y teniendo en consideracion el tiempo que lleva Olivares de prision, puede el Juzgado, usando de la facultad que lo concede la ley 9, tít. 31, Part. 1ª, darlo por compurgado con la prision sufrida, y mandar se le ponga en libertad bajo de fianza, mientras se revisa la causa por la superioridad.

México, Octubre cuatro de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Herrera Campos.*